

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD
Bogotá D.C, veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: **Acción de tutela**
Radicación: **2023-00283**

I. ASUNTO:

Dentro de la oportunidad prevista en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, procede el Juzgado a resolver la acción de tutela instaurada por **DIEGO FERNANDO RIVERA ACUÑA** actuando en calidad de apoderado de la señora **NURY MARCELA BASTO SILVA** en contra de la **AGENCIA NACIONAL DE MINERIA (ANM)**

II. ANTECEDENTES:

El accionante sustenta sus pretensiones en los hechos que se resumen a continuación:

2.1. HECHOS (SÍNTESIS):

PRIMERO: El día 31 de Marzo de 2023 por medio electrónico en la página web de la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, identificada con NIT: 900500018-2, se interpuso derecho de petición al cual se le dio el N° de radicado 20231002357062

SEGUNDO: La petición ante la accionada fue radicada para solicitar copia de los documentos relacionados con el accidente donde falleció el señor HERMES BASTO BASTO (QEPD)

TERCERO: La accionada AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, no ha proporcionado pronunciamiento alguno respecto del derecho de petición presentado por el suscrito.

CUARTO: Han pasado 39 días desde el día 31 de Marzo, día en el que se presentó el derecho de petición

QUINTO: La accionada AGENCIA NACIONAL DE MINERIA se encuentra incumpliendo los términos de respuesta contenidos en la Ley 1755 de 2015 y el DECRETO 491 DE 2020.

2.2. PETICIÓN:

Ordenar a la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA que, en el término de 48 horas, entregue una respuesta clara, de fondo, precisa y congruente respecto de los documentos solicitados por el accionante en la petición presentada el día 31 de Marzo de 2023.

III. ACTUACIÓN PROCESAL:

La acción fue admitida por este estrado judicial el 10 de mayo de 2023, ordenándose realizar las respectivas notificaciones y solicitando contestar el libelo dentro del término de dos (2) días.

3.1. RESPUESTA:

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (archivo digital 010): Solicitaron se niegue la acción de tutela, argumentando que:

(...)

El accionante persigue que el Honorable Juez Constitucional proteja su derecho fundamental de petición, el cual, a su juicio, ha sido vulnerado y como consecuencia

ordene que, la Agencia Nacional de Minería emita respuesta de fondo a la petición allegada.

En virtud de lo solicitado por el apoderado de la accionante, no es procedente conceder el amparo constitucional perseguido, toda vez que la Agencia Nacional de Minería SI dio respuesta al derecho de petición radicado y referido por el extremo accionante. Lo anterior se efectuó mediante radicado ANM No. 20239030822941 del 12 de mayo de 2023 notificado electrónicamente el 12 de mayo de 2023 a la dirección indicada por el apoderado de la accionante en su escrito de petición, la cual es: solucionesabog@gmail.com., y se adjunta como prueba dentro del presente escrito.

(...)

las pretensiones elevadas por el accionante no están llamadas a prosperar toda vez que la Agencia Nacional de Minería ya dio trámite a la petición elevada por el extremo accionante, razón por la cual amparar el derecho fundamental de petición no tiene ningún asidero jurídico

A su turno se contestó de manera expresa y de fondo los puntos solicitados por parte de la accionante, tal como se puede evidenciar en la respuesta emitida por la entidad por las siguientes razones:

1. Se explicó detalladamente las razones jurídicas y de facto por las cuáles a la fecha no se le puede entregar el título minero solicitado hasta tanto cumpla con los documentos solicitados. Lo anterior conforme a lo establecido por el artículo 88 del Código de Minas.
2. Se relacionó la información general del contenido del Contrato de Concesión CH1-091.
3. Se remitió en adjunto con la respuesta el informe de emergencia Minera No. ESSMN-010- E del 10 de marzo de 2023. 4. El informe de accidente será remitido una vez se profiera acto administrativo y se notifique al titular en estrados en la página web.



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA



Radicado ANM No: 20239030822941

Nobsa, 12-05-2023 16:58 PM

Señor
DIEGO FERNANDO RIVERA ACOSTA
Email: solucionesabog@gmail.com
Celular: 3102557739
Dirección: Cra. 10 N 21-15
Tunja - Boyacá

Asunto: Respuesta su radicado 20231002357062 del 31 de marzo de 2023. Expediente minero CH1-091.

Cordial saludo.

Dando alcance a su comunicación del asunto, me permito dar respuesta a sus solicitudes, así:

"(...) 1. Sírvese aportar copia del TÍTULO MINERO -CONTRATO DE CONCESIÓN de la mina ubicada en la vereda San José del municipio de Tópaga a nombre de Lumminer LTDA identificada con NIT 826.001.701-6 en donde ocurrió el accidente del señor HERMES BASTO BASTO...

1 ... 3. Sírvese aportar copia de las visitas de fiscalización realizadas por la Agencia Nacional de Minería en los años 2021, 2022, 2023.

2

3 4. Sírvese aportar copia del PLAN DE TRABAJOS Y OBRAS AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD MINERA. (...)"

IV. CONSIDERACIONES:

1. COMPETENCIA:

Este Juzgado es competente para conocer de la acción de tutela con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1.991.

2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN:

La acción de tutela es un mecanismo de amparo judicial que permite a las personas exigir ante cualquier Juez de la República, en todo momento y lugar, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando se presente una violación o amenaza de

violación por actos, hechos, omisiones u operaciones de cualquier autoridad pública, o por la acción u omisión de particulares bajo ciertas y determinadas circunstancias que define la Ley.

Sin embargo, el acceso a este procedimiento preferente y sumario es procedente siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial que sea idóneo, apreciado en concreto, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por lo mismo, no es alternativo sino residual.

Según lo previsto en el numeral 2º del Decreto 306 de 1992 (reglamentario del Decreto 2591 de 1991), dicha acción protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, por ende, no puede emplearse, para hacer respetar derechos que sólo tengan rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.

3. DE LOS DERECHOS VULNERADOS

En su escrito de tutela **DIEGO FERNANDO RIVERA ACUÑA** actuando en calidad de apoderado de la señora **NURY MARCELA BASTO SILVA**, considera que LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, le vulnera su derecho fundamental de petición, al no dar respuesta a su petición radicada con el número 202310023570623 del 31 de marzo de 2023.

Como quiera que en este proceso se reclama la contestación del derecho de petición, el Despacho estima pertinente advertir sobre la protección el derecho fundamental de petición, que ésta comprende los siguientes elementos de acuerdo con lo expuesto por el máximo tribunal constitucional en sentencia T -667 de 2011, los cuales se exponen a continuación:

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas.

(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en las normas correspondientes.

(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que obliga a la autoridad a quien se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, a pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guarden relación con el tema planteado. Esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado.

(4) Y, el derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta”.

Igualmente, la H. Corte Constitucional en sentencia T-206 de 2018 adocrinó que la “Respuesta debe ser de fondo, oportuna, congruente y **tener notificación efectiva**” (negrilla y subrayado propio).

Sobre la notificación de la respuesta del derecho de petición la H. Corte Constitucional en Sentencia T-430 de 2017, expuso lo siguiente:

La notificación del peticionario implica la obligación de las autoridades y de los particulares de poner en conocimiento del interesado la resolución de fondo de su solicitud. En efecto, si el peticionario no tiene acceso a la respuesta, puede considerarse que nunca se hizo efectivo el derecho, pues existe la obligación de informar de manera cierta al interesado sobre la decisión, para que éste pueda ejercer, si así lo considera, los recursos que la ley prevé en algunos casos o, en su defecto, demandarla ante la jurisdicción competente. En ese sentido, esta Corte en la sentencia C-951 de 2014 indicó que: “el ciudadano debe conocer la decisión proferida por las autoridades para ver protegido efectivamente su derecho de petición [56], porque ese conocimiento, dado el caso, es presupuesto para impugnar la respuesta correspondiente. La notificación es la vía adecuada para que la persona conozca la resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011” Negrilla y subrayado fuera del texto.

4. DEL CASO CONCRETO

Con el anterior panorama jurisprudencial se procede a descender al caso objeto de estudio.

Para iniciar, se tiene que **DIEGO FERNANDO RIVERA ACUÑA** actuando en calidad de apoderado de la señora **NURY MARCELA BASTO SILVA** solicita mediante su derecho de petición, que la entidad accionada emita respuesta sobre los siguientes aspectos:

1. *Sírvase aportar copia del TÍTULO MINERO -CONTRATO DE CONCESIÓN de la mina ubicada en la vereda San Jose del municipio de Topaga a nombre de Lumminer LTDA identificada con NIT 826.001.701-6 en donde ocurrió el accidente del señor HERMES BASTO BASTO*
2. *Sírvase expedir CERTIFICACIÓN, de los actuales titulares mineros del CONTRATO DE APORTES-TÍTULO MINERO referido en el hecho anterior, de la mina ubicada ubicada en la vereda San José del municipio de Topaga.*
3. *Sírvase aportar copia de las visitas de fiscalización realizadas por la Agencia Nacional de Minería en los años 2021, 2022, 2023.*
4. *Sírvase aportar copia del PLAN DE TRABAJOS Y OBRAS AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD MINERA.*
5. *Sírvase aportar el informe de investigación realizado por la ANMy el grupo de seguridad y salvamento minero respecto del accidente del señor HERMES BASTO BASTO el día 02 de Marzo de 2023, dentro del título minero de LUMMINER LTDA, referenciado en el numeral 1.*

Respecto de la anterior solicitud la entidad accionada procedió a dar contestación a su requerimiento, mediante radiado número ANM No: 20239030822941 del 12/05/2023 contestación que se remitió al correo electrónico solucionesabog@gmail.com, mismo correo reportado en esta acción de tutela, adjuntando todos los documentos soportes de su respuesta, dándose de esta manera respuesta de fondo a la solicitud de **DIEGO FERNANDO RIVERA ACUÑA** actuando en calidad de apoderado de la señora **NURY MARCELA BASTO SILVA**, tal y como pasa a verse:

12/5/23, 16:59

Correo: Jefferson Amortegui Walleros - Outlook

Retransmitido: Respuesta su radicado 20231002357062 del 31 de marzo de 2023.
Expediente minero CH1-091.

Microsoft Outlook
<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@anmgovco.onmicrosoft.com>
Vie 12/05/2023 17:03
Para: solucionesabog@gmail.com <solucionesabog@gmail.com>

1 archivos adjuntos (20 KB)

Respuesta su radicado 20231002357062 del 31 de marzo de 2023. Expediente minero CH1-091.;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

solucionesabog@gmail.com (solucionesabog@gmail.com)

Asunto: Respuesta su radicado 20231002357062 del 31 de marzo de 2023. Expediente minero CH1-091.

De acuerdo con lo anterior, encuentra el despacho que la contestación a la petición elevada por el accionante fue efectivamente enviada a su correo electrónico 12 de mayo de 2023.

En este sentido, se puede concluir que la finalidad de la acción constitucional ya se cumplió mediante la vía administrativa, dado que la entidad accionada ya dio contestación al derecho de petición radicado por el accionante.

En comunión con lo expresado por la H. Corte Constitucional, se tiene que en este momento es inviable ordenar por vía judicial (fallo de tutela) algo que ya se hizo por la vía administrativa (respuesta).

Sobre el particular, la H. Corte Constitucional en sentencia T -124/2009 con ponencia del magistrado Dr. Humberto Antonio Sierra Porto, adoctrinó lo siguiente:

*“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que motiva el proceso de tutela **se supera** o cesa, ya sea (i) antes de iniciado el proceso ante*

los jueces de instancia o **en el transcurso del mismo** o (ii) estando en curso el trámite de revisión ante esta Corporación[39].**En éste último evento, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela se torna improcedente[40] por no existir un objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda proferir un fallo inhibitorio** (por expresa prohibición del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991).” NEGRILLA Y SUBRAYADO FUERA DEL TEXTO.

En consecuencia, se evidencia el advenimiento del fenómeno jurídico denominado “**HECHO SUPERADO**” pues para la fecha de este pronunciamiento se avizora que el motivo generador de la presente acción de tutela ya fue resuelto.

Así las cosas y sin más consideraciones por no ser ellas necesarias, se deberá negar la presente acción constitucional, por lo considerado líneas arriba de este proveído.

En mérito de lo anteriormente expuesto, **EL JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN EL NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,**

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la acción constitucional reclamada por **DIEGO FERNANDO RIVERA ACUÑA** actuando en calidad de apoderado de la señora **NURY MARCELA BASTO SILVA**, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR las diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada la sentencia dentro del término legal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned above the printed name of the judge.

CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ
JUEZ

AP.